

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARIELA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE TABARES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-022-2018-00481-01, venido a esta instancia en consulta de la sentencia de primer grado en favor de la demandante.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECT S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso y con la Escritura Publica N° 3377 del 02 de septiembre de 2019, se procede a reconocer personería a la abogada CLAUDIA MILENA GUARÍN GARCÍA, portadora de la T.P. 306.473 del C. S. de la Judicatura, para que represente a Colpensiones en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que sea reconocida como beneficiaria del 100% de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge del señor MIGUEL ÁNGEL TABARES GIRALDO, desde el 13 de julio de 2013, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en forma subsidiaria la indexación de las condenas.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, expone la demandante, que el 16 de mayo de 1981 falleció su cónyuge el señor MIGUEL ÁNGEL TABARES GIRALDO.

Manifiesta que, en razón de lo anterior, el día 13 de julio de 2016, se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes, por haber convivido con el causante al momento de su fallecimiento.

Relata que COLPENSIONES expidió la Resolución GNR251067 del 25 de agosto de 2016, mediante la cual decidió negar la pensión de sobrevivientes a la cónyuge del afiliado fallecido, por no acreditar el requisito mínimo de semanas cotizadas para su reconocimiento, decisión que fue ratificada mediante Resolución GNR 317445 del 28 de octubre de 2016.

Afirma que su cónyuge dejó acreditadas 150 semanas cotizadas en los últimos 6 años anteriores a la fecha de su fallecimiento, esto es, entre el 16 de mayo de 1975 y el 16 de mayo de 1981, por lo que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 232 de 1984, el cual modificó el Decreto 3041 de 1966, acredita los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia, despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, argumentando que a la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha indicado en múltiples oportunidades que las normas aplicables para decir sobre la pensión de sobrevivientes, son las vigentes al momento del fallecimiento del causante, de manera que como en este caso el afiliado falleció en el año 1981, para ese momento la norma legal aplicable era el artículo 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, normativa que en su redacción original, contempló que para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, el afiliado debía contar con 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento, de las cuales, 75 semanas debían haber sido cotizadas en los últimos 3 años, y en ese caso a pesar que el causante había dejado cotizadas en toda su vida laboral un total de 254 semanas, de estas 174 semanas cotizadas en los últimos 6 años, en los últimos 3 años, tan solo tenía 50 semanas, no cumpliendo con el segundo presupuesto de haber alcanzado a cotizar 75 semanas en este interregno de tiempo.

Finalmente, concluyó el *a quo* que no se podía dar aplicación a la condición más beneficiosa pretendida por la parte demandante, porque buscaba aplicar una norma que fue creada con posterioridad al fallecimiento del causante, de manera que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no era posible dar aplicación a normas expedidas después de que se consolidara una situación particular.

En contra de la anterior decisión no se presentaron recursos, motivo por el cual se dispuso el envío del expediente ante esta corporación judicial para surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia en favor de la demandante.

3. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales del DEMANDANTE y COLPENSIONES, presentaron alegatos de conclusión, anotando resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

Se desconoce por parte del honorable juez veintidós laboral del circuito de Medellín lo consagrado en el artículo 20 del decreto 3041 de 1966 modificado por el artículo 1 del decreto 232 de 1984 que reza:

ARTICULO 5o. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:

(...) b. b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época. (subrayas por fuera del texto)

Véase pues como se desconoció por parte del *a quo*, la condición legal que le otorga a mi representada la pensión de sobrevivencia causada por su cónyuge MIGUEL ÁNGEL TABARES GIRALDO (Q.E.P.D) quien falleció el día 16 de mayo de 1981, habiendo cotizado entre 16 de mayo de 1975 al 16 de mayo de 1981, más de las 150 semanas requeridas por ley.

Sin embargo, en la valoración del proceso efectuada por el juez de primera instancia no se da aplicación a la citada norma, pues consideró que no le es aplicable la citada norma a mi representada, desconociendo la dependencia económica acreditada de mi mandante del señor TABARES GIRALDO.

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

Verificada la historia laboral, del causante, cotizó 254.86 semanas desde el 31 de mayo de 1971 hasta la fecha el 16 de mayo de 1981, encontrándose que dentro de los seis (6) años anteriores a su fallecimiento, es decir, del 16 de mayo de 1975 al 16 de mayo de 1981, cotizó un total de 174.15 semanas, ahora bien dentro de los tres (3) años anteriores a su deceso cotizó 50 semanas, motivo por el cual se concluye que el causante a pesar de acreditar el requisito de las 150 semanas, no sucedió lo mismo con 75 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento.

Finalmente es procedente aclarar la improcedencia de aplicar la norma invocada Decreto 232 de 1984, toda vez que su vigencia inició con posterioridad a la muerte del afiliado.

4. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER.

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente conforme los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para tal fin, como consecuencia del fallecimiento del señor MIGUEL ÁNGEL TABARES GIRALDO.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer en consulta del fallo de primera instancia en favor de la demandante, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

5. CONSIDERACIONES:

Para resolver la consulta en favor de la parte demandante, sea lo primero manifestar que como quiera que el causante de la pensión pretendida por la actora falleció el **16 de mayo de 1981**, conforme se anota en la copia del registro civil de defunción obrante a folio 12 del cartulario, la norma legal a aplicar para definir el derecho que tenga o no la demandante a la pensión denominada de viudedad en esa fecha, hoy de sobrevivientes, son en principio los Arts. 20 y 21 del Decreto 3041 de 1966, que regulan los derechos pensionales de los afiliados al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) disponían lo siguiente:

“Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen según el artículo 5º, para el derecho a pensión de invalidez,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.”

“Artículo 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.”

Y el Art. 5 del referido Decreto en su versión original, establecía lo siguiente:

“ARTICULO 5o. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:

a. Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 90 de 1948;

b. Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años.” (Negrillas agregada)

De esta manera, dada la claridad de las normas mencionadas, es incuestionable que, a la fecha del fallecimiento del causante, se encontraba vigente la condición de que 75 semanas de las 150 exigidas dentro de los seis años anteriores, correspondieran a los últimos 3 años, como requisito para causar el derecho a la pensión de invalidez y por extensión, a la de sobrevivientes, de conformidad con el artículo 20 del mencionado Acuerdo 224 de 1966.

En ilación con lo anterior, en este caso si bien el causante dejó acreditado el requisito de las 150 semanas cotizadas *dentro de los seis (6) años anteriores a su deceso*, pues entre el **16 de mayo de 1975** y el **16 de mayo de 1981** (fecha de su fallecimiento), alcanzó a cotizar un total de **174.86 semanas**, como se prueba con el histórico de cotizaciones que milita a en el CD de folio 44 del expediente digital, lo cierto es que en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento, esto es, entre el **16 de mayo de 1978** y el **16 de mayo de 1981**, cuenta tan solo con **50.43 semanas cotizadas**, mismas que resultan insuficientes para alcanzar las 75 semanas requeridas en este interregno de tiempo.

Ahora, si bien la parte actora consiente que no cumple los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, con la norma original del artículo 20 del Decreto 3041 de

1966, solicita la aplicación los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y situación más favorable para el trabajador y que en ese sentido, se recurra al Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, el cual modificó el artículo 20 del Decreto 3041 de 1966, disponiendo que para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, únicamente se requería contar con 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.

No obstante lo señalado, es preciso indicar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido pacífica en sostener que, en principio, dado el efecto inmediato de la ley y el carácter no retrospectivo de las disposiciones laborales y de seguridad social, la muerte del afiliado es el hito o momento que marca la aplicación en el tiempo de la normativa que ha de regular el derecho de los beneficiarios de la prestación reclamada, es decir que las normas de derecho del trabajo y de la seguridad social rigen hacia futuro y tienen efecto general inmediato, de manera que está prohibida la aplicación retroactividad de la ley frente a situaciones que ya se consolidaron en el pasado o que se consumaron anteriormente, con el fin de procurar seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones entre los diversos actores del mundo del trabajo y del sistema de seguridad social. Así se ha explicado en las decisiones CSJ SL, 17 de sep. 2008, rad. 34904; CSJ SL834–2013; CSJ SL8430-2014; CSJ SL10147-2017; CSJ SL3115-2018 y CSJ SL1889-2020, entre otras.

Así las cosas, como ya se explicó las normas que regulan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en este caso son los artículos 5 y 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de esa misma anualidad, los que establecen unos requisitos para acceder a dicha prestación. Uno de ellos, es el de tener la densidad de cotizaciones requeridas antes de producirse la contingencia (muerte), de manera que como en este caso el afiliado fallecido no dejó acreditado el número mínimo de semanas para que sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, no es posible bajo normativas posteriores inexistentes al momento del deceso del causante, como lo pretende la parte accionante, analizar el caso de autos, razón por la cual, se CONFIRMARÁ la sentencia de instancia por encontrarse ajustada a derecho.

Sin costas en esta instancia por revisarse la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta.

6. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 07 de julio de 2020 proferida por el JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **MARIELA DE JESÚS RODRÍGUEZ DE TABARES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La presente sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión,

Los Magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a87f571ebc874984c9672a961051a289ac0802ec638e25b469ff366ac00257fc**

Documento generado en 24/11/2022 02:03:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>